Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Allende y señor Saavedra, que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, para agilizar la tramitación de la solicitud de pensión de invalidez, tratándose de enfermos terminales.

. ANTECEDENTES

Lamentablemente, quienes padecen enfermedades terminales deben además soportar injustificados procesos burocráticos, realización de nuevos exámenes o entrevistas y extensos tiempos de esperas para poder acceder a la pensión de invalidez, debido a que las Comisiones Médicas que deben verificar el cumplimiento de los requisitos y presentan un retraso significativo en la dictación de sus resoluciones.

De conformidad a información disponible en la Superintendencia de Pensiones, tan sólo en la Región Metropolitana, a febrero de 2023 existían 9.468 requerimientos pendientes en la “Metropolitana Centro” y 7.745 en la “Metropolitana Sur”.

En otras Comisiones Médicas regionales, también se observa un número significativo requerimientos sin resolver, como en la comisión de Viña en que existían 4.485; Concepción con 2.432; Rancagua con 2.154; Temuco con 2.110; o Antofagasta con 1.792. Y la cifra nacional asciende a 39.200 requerimientos pendientes de dictaminar y 3.214 apelaciones en la misma condición, en la fecha señalada anteriormente.

Los tiempos de espera desgraciadamente también son extensos, ya que en Antofagasta demora 105 días, en la Metropolitana 86 y 85 días (*centro y sur, respectivamente*), y Viña, Rancagua o Chillán presenta cifras superiores a 80 días. Y el promedio nacional es de 69 días, es decir, cerca de 10 semanas (*un poco más de 2 meses espera*). Y debe tenerse presente que estos tiempos se contabilizan desde la comparecencia, es decir, el plazo real que esperan los ciudadanos es incluso superior.

Sin perjuicio de comprender las dificultades presupuestarias, administrativas y de recursos humanos que los servicios públicos puedan tener, y en especial las Comisiones Médicas, no resulta razonable ni digno, hacer esperar dicho tiempo a personas que padecen enfermedades terminales, ya

que precisamente lo que no tienen es tiempo, pues tienen una expectativa de vida inferior a doce meses.

En este contexto, resulta especialmente preocupante que entre enero de 2022 y febrero de 2023, se hayan rechazado administrativamente 453 requerimientos con causal de fallecimiento.

Esta es una cifra indignante, de mujeres y hombres que fallecieron a la espera de una resolución administrativa que les permitiera tener algunos recursos económicos durante sus últimos días de vida y de la cual nos corresponde hacemos cargo.

Por todo lo anterior, las Senadoras y Senadores firmantes, sometemos a tramitación del Congreso Nacional, este proyecto de ley mediante el cual se facilita que las solicitudes se resuelvan en el plazo más breve posible, velando porque estas no excedan los 15 días, y permitiendo que puedan incorporarse anticipadamente y de forma prioritaria en la sesión de la Comisión Medica más próxima.

Además, dispone que se preferirá la realización de visitas médicas domiciliarias, cuando se requieran exámenes médicos, evaluaciones, informes médicos o peritajes adicionales a los de los médicos tratantes, siempre y cuando estas sean indispensables y posibles para el afiliado. Esto en razón de la condición de salud que puede tener la persona y las dificultades de traslado que puede significar.

Por último, dispone que en este caso deberán realizarse en la oportunidad más próxima, velando por no exceder los 5 días y cautelando que una la eventual suspensión de plazos para el dictamen, no exceda los 15 días.

Esperamos que con estas adecuaciones se pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas con diagnóstico médico de alguna enfermedad terminal o condición patológica grave, progresiva e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, y que estas mujeres y hombres no fallezcan sin poder acceder a su pensión durante sus últimos días de vida.

. FUNDAMENTOS

El art. 4 del DL.N°3500, consagra el derecho a la pensión de invalidez para aquellos afiliados no pensionados que no cumpliendo los requisitos de edad para obtener la pensión de vejez, sufran un

menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, a consecuencia de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, la cual puede ser total o parcial, dependiendo si su pérdida de la capacidad de trabajo es de al menos dos tercios (*total*), o si es igual o superior al cincuenta por ciento e inferior a dos tercios (*parcial*).

ARTICULO 4° Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo, de al menos, dos tercios, y

b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

(...)

En estos casos las Comisiones Médicas, deben verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir un dictamen de invalidez (total o parcial), a contar de la fecha que se declare la incapacidad o lo negará, según corresponda. Y si el dictamen declara la invalidez total, tendrá el carácter definitivo y único.

ARTICULO 4° (Inciso II)

(...)

Las Comisiones Médicas a que se refiere el artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.

(....)

Asimismo, de conformidad a la Ley N° 20.255 que establece la Reforma Previsional, aquel as personas mayores de edad que no tienen derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia, y cumplan los demás requisitos, pueden optar a la Pensión Solidaria de Invalidez (PBSI), la cual actualmente asciende a \$214.296 pesos

mensuales.

Artículo 16.- Serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:

a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y cinco años.

b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 32.

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.

En todo caso, los extranjeros no podrán acceder a la pensión establecida en el presente Párrafo, ni al aporte a que se refiere el Párrafo siguiente, cuando la causa del principal menoscabo que origine la invalidez provenga de un accidente acaecido fuera del territorio de la República de Chile. Lo anterior, siempre que el extranjero no tenga la calidad de residente en Chile, de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.094, de 1975, al verificarse dicho evento.

Pero para ello se requiere igualmente que haya sido declarada con invalidez por parte de una Comisión Médica definida en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto ley

IDEA MATRIZ

La presente moción tiene por objeto mejorar la condición de vida de los enfermos terminales y sus familias, mediante la facilitación del proceso de declaración de invalidez, para que puedan acceder a su derecho a una pensión de invalidez durante sus últimos días de vida, evitando que fallezcan o retrasen injustificadamente su recepción producto de las demoras en las Comisiones Médicas y otros

trámites.

POR TANTO,

En virtud de los antecedentes y fundamentos antes expuestos, las Senadoras y Senadores firmantes, presentamos el siguiente proyecto de ley:

IV. PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Para agregar un nuevo inciso final al artículo 4 del Decreto Ley N°3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, del siguiente tenor:

"Las solicitudes de afiliados que padezcan enfermedades terminales o condición patológica grave debidamente diagnosticadas, con una expectativa de vida inferior a 12 meses, se resolverán dentro del plazo más breve plazo posible, velando que no sobrepase los 15 días y podrán incorporarse prioritariamente en la sesión más próxima de la Comisión Médica respectiva. En caso de requerirse algún examen clínico, evaluación, informe médico o peritaje adicional, se preferirá la realización de visitas médicas domiciliarias y sólo excepcionalmente se podrá requerir la comparecencia del afiliado a la Comisión Médica u otra dependencia, cuando esta sea indispensable y posible para el afiliado, debiendo realizarse en la oportunidad más próxima, camelando que no sobrepase los 5 días. La suspensión del plazo del dictamen en estos casos, no podrá ser superior a 15 días. "